

RESPONSABILIDAD Y DELITO

INTRODUCCIÓN

En nuestra experiencia de trabajo en el CIEN interrogamos las intervenciones del discurso jurídico en relación a los niños y adolescentes apuntando a situar en la particularidad de cada caso, la forma que toma la relación problemática entre el sujeto y la ley y los fallos en la distribución del goce que inevitablemente produce el Derecho. Intentamos ubicar las coordenadas que nos permitan precisar las consecuencias, los modos de intervención posibles y las ficciones que convengan.

Nos ocupamos esta vez de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores que infringen la ley penal que ha surgido en distintos sectores como respuesta a una creciente sensación de inseguridad.

La mirada mediática dominante nos presenta una infancia escindida donde un niño, un adolescente puede ser alternativamente alguien a quien hay que preservar de las contingencias de la vida, de los encuentros con lo real, el dolor, el temor, o- si comete un delito- alguien a quien encerrar, inclusive de por vida, para preservar “nuestra seguridad”

El espectro de apoyo a la propuesta va desde quienes reclaman mano dura contra los delincuentes (alentando el denominado gatillo fácil) hasta sectores que se postulan como defensores de los derechos de los niños pero plantean la baja de edad como una reglamentación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El debate ha sido atizado en los medios y la propuesta se ha plasmado en varios proyectos de ley presentados al Congreso.

Sin embargo es necesario diferenciar, en el campo jurídico, a quienes quieren obtener un efecto de segregación bajando la edad de imputabilidad, para poner a los menores en prisión, de quienes quieren *“un desplazamiento para sacar al niño de la alienación en que está, sin ingenuidad, sabiendo lo terrible de la situación que está atravesando.”*¹

RESPONSABILIDAD

En primer lugar conviene ubicar que lo que está en debate no es si un chico de 14 años es responsable en un sentido amplio, sino **si es responsable penalmente**, es decir si está en condiciones de valorar las consecuencias de sus actos en conflicto con la ley y por lo tanto recibir el castigo o pena que el Código Penal impone en estos casos.

J. A. Miller² indica que es muy exigente pedir que se sepa discernir el bien del mal, y prosigue *“Si ese es el criterio de la responsabilidad todos somos irresponsables, dado que la definición, de hecho depende del código y que ese código está sometido a las evoluciones normales, a la adaptación continua al cambio de las costumbres”* De esta manera disuelve la absolutización imaginaria de la responsabilidad.

Para el psicoanálisis el sujeto siempre es responsable de su posición, es decir de poder responder. Ya Freud³ ubicaba que, aun calificando de acuerdo a pautas sociales las tendencias buenas y malas que hay en cada uno, es preciso asumir la responsabilidad por ambas, haciendo lugar como propio a eso desconocido, inconsciente y reprimido que se pone de manifiesto por ejemplo en los sueños.

La experiencia demuestra que de una u otra manera el sujeto se ve compelido a asumir esa responsabilidad. En este sentido la responsabilidad por aquello que excede el campo del yo, de la conciencia va más allá del planteo jurídico.

Pero es preciso no confundir la responsabilidad respecto de su goce para el psicoanálisis con la suposición de un sujeto autónomo con pleno dominio sobre sí y sus condiciones.

Encontramos en la subjetividad de la época, una promoción del individualismo, una exaltación del ideal de libertad y una insistencia en *“... la evolución de la sociedad hacia una mayor*

responsabilidad de cada hombre en su propio destino”⁴ que enmascara la posición de los sujetos en el discurso, desconociendo la sujeción al lugar del Otro.

En términos jurídicos la discusión sobre **la edad de responsabilidad penal** quiere decir que es el juez quien debe establecer si al momento del hecho el acusado podía o no comprender la criminalidad del acto. Para el Derecho no basta con que una persona sepa lo que está haciendo y aun que sepa que eso es malo para tenerlo como imputable, el juez debe tener en cuenta si además estaba en condiciones de valorar las consecuencias de ese acto.

Por otra parte es preciso poner en cuestión la convicción de que sólo la ejecución de la pena conduce a la asunción de la responsabilidad en el hecho delictivo; la experiencia indica que, particularmente la pena de privación de libertad muchas veces lleva al sujeto en el sentido contrario. Inclusive en los casos donde podemos leer que hay una búsqueda de punición en la comisión de un delito cabe considerar la posibilidad de que sea el sujeto mismo quien la encuentre y no el sistema penal.

QUE CASTIGO

Toda sociedad tiene una ley positiva, ya sea un conjunto de normas consuetudinarias o un sofisticado aparato jurídico, que contienen los distintos grados de transgresiones que definen al delito y los castigos que articulan la relación del delito con la ley. Dice Foucault:⁵ *“La proporción entre la pena y la calidad del delito está determinada por la influencia que tiene sobre el orden social el pacto que se viola”*

Lacan⁶ postula que el castigo constituye una de las características esenciales de la idea de hombre que prevalecen en una sociedad dada, ya que se presume que la pena es proporcional al bien jurídico afectado. La elevación creciente de las penas por los delitos contra la propiedad indica la dirección en la que marcha esta idea en nuestra sociedad

Es notable la vigencia que mantienen ciertas caracterizaciones de la *“Introducción a las funciones del psicoanálisis en Criminología”* tanto cuando se refiere a las vacilaciones que se registran desde el siglo XIX en la conciencia social respecto del derecho de castigar, como a la relación que establece entre los ideales utilitarios de la sociedad capitalista y la significación de la punición.

Lacan plantea que la concepción lombrosiana, - que posteriormente retoma y remoja Garófalo- sobre la inferioridad constitutiva de algunos sujetos que los haría criminales da respuesta a los móviles del delito que escapan al registro utilitario y atribuye su éxito a *“...las satisfacciones que podía exigir la euforia de la clase dominante, tanto para su comodidad intelectual como para su mala conciencia”*

Y es esta mala conciencia respecto de los fundamentos de su poder para hacer las leyes lo que ha llevado al Derecho a sustituir la significación expiatoria del castigo por una concepción sanitaria de la penología que lo reduce a una finalidad correctiva: **resocialización, reeducación, reinserción, reindividualización** como objetivos en la imposición de la pena nombran lo irreductible, lo imposible de tratar.

Por otra parte se plantea la penalización con una función utilitaria partiendo de la idea de que el ser humano hace un frío cálculo de costos y beneficios frente a cada impulso delictivo; la antropología que la sustenta es la misma de la lógica del mercado que, aplicada al delito supone que los delincuentes maximizan la utilidad esperada de sus conductas por sobre sus logros. Es decir que los criterios que prevalecen hoy para encuadrar la racionalidad de una acción delictiva siguen siendo esencialmente utilitaristas.

Sin embargo en su aplicación se encuentran con algo que no encaja, que no se explica, que no se deja tomar, un tope, que es lo que en psicoanálisis llamamos goce, que no se deja capturar por

el aparato conceptual del Código⁷ y este goce en su repetición, recusa el valor disuasivo de la pena.

LA JUDICIALIZACIÓN

En el contexto actual, constatamos que la ley tiende a afirmar su autoridad apoyándose cada vez más en el accionar del aparato jurídico. Hay un desplazamiento de la eficacia: antes la prohibición se sostenía en sus enunciados, ahora, cada vez más, recurre al castigo. Asistimos a una judicialización y penalización creciente como respuesta a una cuestión social, y a un tratamiento de la pobreza por vía de lo penal que es correlativo de una falta de solución política.⁸

La edad de imputabilidad establece un límite a partir del cual se apuesta a modos de resolución de los problemas de los chicos por el sistema penal. Este paso a la esfera penal implica una dimisión de la responsabilidad de quienes deben ocuparse de la situación de los niños, de su bienestar en un sentido amplio, en otros planos y define el punto en el cual el Estado pasa de la atención social a la punición.

Hay una tensión en esta etapa del capitalismo entre la exacerbación del consumo “para todos” y la precarización laboral con su secuela de escasez de ingresos⁹, exclusión y deterioro de los lazos sociales. *“La no “satisfacción de las necesidades materiales” no solo no apaga el circuito pulsional sino que lo acentúa de un modo mortífero. En este aspecto el Capitalismo, al igual que la pulsión, es un movimiento circular que se auto propulsa alrededor de un vacío que lo obliga siempre a recomenzar sin que ninguna satisfacción lo colme de un modo definitivo.”*¹⁰

En los ámbitos judiciales se ha verificado que solo entran en el sistema penal los menores, autores o víctimas que son “vulnerables”, es decir aquellos que por una condición de “marginalidad” son detectados por las fuerzas de seguridad y la administración de justicia.

Los proyectos de ley plantean bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Actualmente los chicos son imputables a partir de los 16 años. Si cometen un delito antes de los 18 se los procesa y a los 18 se decide si hay pena o no; mientras tanto están sometidos al sistema tutelar, muchas veces con medidas de seguridad que configuran una privación de libertad, al arbitrio del juez.¹¹ En este punto podríamos coincidir con la posición de quienes plantean la necesidad de un Régimen penal juvenil, en su propósito de garantizar un juicio justo y garantías procesales a los jóvenes.

Pero en el contexto actual, teniendo en cuenta las condiciones en que funciona el sistema penal, el aparato jurídico y los establecimientos carcelarios, y considerando que tampoco hay garantías para los adultos en los sectores populares, no nos parece oportuno y menos aun cuando incluye subrepticamente la baja de edad de imputabilidad como respuesta a reclamos sobre la inseguridad.

Que no funcionen bien las medidas de seguridad no quiere decir que entonces hay que castigar penalmente a los menores de 16 años sino que es preciso buscar las vías que garanticen sus derechos. Entendemos que dentro de la legislación y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño hay herramientas para salir de lo tutelar y la internación compulsiva.

La Convención es bien clara en que las medidas de privación de libertad deben ser objeto de revisión judicial por tribunales superiores al juez que las dispuso, y deben estar sustentadas en una respuesta proporcional a la conducta cometida; son excepcionales y tienen que durar el menor tiempo posible.

La Convención también establece que en el caso de infracción penal no se impondrá prisión perpetua, que el encarcelamiento es de último recurso por el más breve tiempo posible, y que toda medida es revisable por un órgano superior. Admite la posibilidad de abordar determinados

casos sin ser judicializados, el establecimiento de medidas alternativas a la internación y fundamentalmente que se guarde proporcionalidad de las medidas con las circunstancias y con el delito.

La insistencia en sancionar penalmente a los menores de 14 años en detrimento de otras soluciones dificulta la posibilidad de encontrar un espacio en el que el sujeto pueda advenir.¹²

La interlocución del psicoanálisis con el discurso jurídico puede contribuir a ubicar las ficciones que convengan a los niños y es en nuestras prácticas donde es preciso obstaculizar una aplicación automática de las normas y favorecer el modo de responsabilizarse de cada uno alojando sus invenciones singulares.

Elena Nicoletti

¹ Laurent, Eric. *El sujeto del inconsciente y el enigma de las normas*. Cuadernos del CIEN III. Buenos Aires. 1999.

² Miller, Jacques Alain. *Sociedad, violencia y síntoma*. Mediodicho. Revista de Psicoanálisis Nº 31. EOL Córdoba. 2006

³ Freud, Sigmund. *La responsabilidad moral por el contenido de los sueños*. O. C. Tomo III Biblioteca Nueva

⁴ “*Ley de orientación*”, publicada en el Boletín Oficial de Educación Nacional., en Francia, a la que J. Lacan hace referencia en el Segundo Impromptu de Vincennes, el 3 de junio de 1970

⁵ Foucault, Michel. *Vigilar y castigar*. p. 100. Siglo XXI Editores. 1976.

⁶ Lacan, J; *Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología* Ed. Homo Sapiens. 1978

⁷ Miller op cit.

⁸ La Sagna, Philippe. *De la coexistencia al nuevo comercio* Revista El NIÑO Nº 6. 1999.

⁹ Kessler, Gabriel “... dado que los delitos contra la propiedad son, en parte, estrategias adaptativas en situación de escasez de ingresos, es razonable encontrar una mayor proporción de personas de bajos ingresos (con causas penales) sin que esto implique sostener ningún tipo de causalidad intrínseca entre sectores populares y delito”
Sociología del delito amateur Paidós. 2004 Buenos Aires

¹⁰ Alemán, Jorge. *Nota sobre una izquierda lacaniana...* Revista “pensamiento de los confines” Nº 20. junio de 2007.

¹¹ Taffetani, Laura. “*En los casos de autores de delito, el criterio imperante es lo que la política criminal llama “derecho penal de autor” es decir, no importa si cometió o no el delito, si es inimputable (menor de 16 años) o relativamente inimputable (entre 16 y 18 años); el acento está puesto en la personalidad del menor autor de delito, en las condiciones sociales que lo rodean, en su familia que no ha cumplido con el deber de control, para evaluar su “peligrosidad”*”. Entrevista. Revista El Niño. Nº 7

¹² Intervención de Judith Miller en la Apertura del Coloquio "Psicoanálisis y Sociedad" realizado en París el 31 de Enero de 2009 como parte de la preparación de PIPOL IV.